Diario amanecer
DEL ESTADO DE MEXICO

Alista Edomex mapa de riesgos electorales *entre dudas por seguridad*

A siete meses de las elecciones de 2027, el gobierno de Delfina Gómez prepara Mesa Política y diagnósticos de inseguridad, mientras persisten interrogantes sobre los municipios vulnerables como los criterios de protección a candidatos y la transparencia de las decisiones.



MIREYA ÁLVAREZ

Toluca, México.- A menos de siete meses de las elecciones de 2027, el gobierno del Estado de México prepara una Mesa Política y mapas de riesgo para identificar posibles amenazas contra aspirantes y candidatos, sin embargo, el anuncio realizado por el **secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares**, deja interrogantes sobre los criterios para clasificar municipios peligrosos, los mecanismos de protección y las garantías de imparcialidad, particularmente en una entidad donde las disputas territoriales, la delincuencia organizada y las tensiones partidistas representan desafíos para la gobernabilidad.

Duarte Olivares informó que la administración encabezada por **Delfina Gómez Álvarez** mantiene reuniones con el Instituto Electoral del Estado de México, presidido por Amalia Pulido Gómez, el Tribunal Electoral estatal y la representación del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de establecer una instancia de coordinación que podría instalarse antes de concluir diciembre, cuando los partidos comenzarán a intensificar sus preparativos internos para seleccionar a quienes competirán por los cargos públicos.

El funcionario reconoció la necesidad de elaborar diagnósticos que permitan anticipar situaciones de inseguridad, aunque evitó precisar qué municipios presentan mayores riesgos, cuáles serán los indicadores utilizados y cuándo estarán disponibles los resultados, información relevante para determinar si las autoridades cuentan con una estrategia preventiva suficientemente desarrollada o si todavía construyen mecanismos frente a problemas cuya atención requiere anticipación.

Mapas de riesgo sin criterios públicos

La elaboración de estos mapas constituye uno de los aspectos más delicados de la preparación electoral, debido a que sus conclusiones podrían influir en decisiones relacionadas con vigilancia, desplazamientos, actos proselitistas y asignación de protección institucional, por lo que resulta indispensable establecer criterios verificables que permitan distinguir entre amenazas documentadas, incidencias delictivas y conflictos políticos, evitando que apreciaciones discrecionales determinen quién recibe atención prioritaria.

Hasta ahora no se ha informado públicamente una clasificación de municipios o distritos considerados vulnerables dentro de esta estrategia, tampoco se han detallado los mecanismos para actualizar los diagnósticos ni la participación de las autoridades municipales, situación que plantea preguntas sobre la capacidad de respuesta ante amenazas que podrían surgir antes del registro formal de candidaturas.

El propio Duarte sostuvo que busca evitar tanto escenarios alarmistas como valoraciones que minimicen los problemas de seguridad, planteamiento que deberá traducirse en procedimientos concretos, porque reconocer la existencia de posibles riesgos representa apenas el primer paso de una política preventiva cuyo cumplimiento tendrá que evaluarse mediante resultados y no solamente declaraciones.

Protección electoral bajo escrutinio

Otro aspecto pendiente corresponde a los requisitos para otorgar medidas de seguridad, particularmente porque el secretario general de Gobierno señaló que podrían contemplarse mecanismos de protección para quienes tengan formalmente la condición de precandidatos o candidatos, circunstancia que abre interrogantes sobre la atención de amenazas contra ciudadanos que participen en procesos internos antes de adquirir esas figuras jurídicas.

La responsabilidad institucional también comprende garantizar que las solicitudes sean evaluadas mediante parámetros objetivos, independientemente del partido político, la influencia del aspirante o su cercanía con autoridades gubernamentales, pues cualquier diferencia injustificada en la protección podría provocar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y afectar la confianza en las condiciones de competencia.

La dimensión del desafío resulta considerable, ya que el próximo **6 de junio de 2027** se renovarán los **125 ayuntamientos mexiquenses y las 75 diputaciones del Congreso local,** además de las diputaciones federales correspondientes a la entidad, en un proceso que movilizará estructuras partidistas, autoridades electorales y millones de ciudadanos.

Exigen transparencia antes de campañas

La Mesa Política deberá definir responsabilidades institucionales, procedimientos de comunicación, protocolos de atención a amenazas y mecanismos de rendición de cuentas, particularmente porque la coordinación entre autoridades electorales y gubernamentales no puede confundirse con intervención del Ejecutivo en decisiones que corresponden exclusivamente a organismos autónomos.

También será necesario aclarar si los diagnósticos incorporarán denuncias por intimidación, extorsión, agresiones contra actores políticos y antecedentes de violencia municipal, así como establecer qué información podrá hacerse pública sin comprometer investigaciones o poner en peligro a posibles víctimas.

El calendario electoral avanza mientras permanece pendiente la instalación formal de este espacio de coordinación, circunstancia que obliga al gobierno estatal a precisar fechas, compromisos y alcances, evitando que la preparación de las elecciones quede limitada a anuncios institucionales sin procedimientos conocidos.

La administración de **Delfina Gómez** enfrentará así una prueba de coordinación y transparencia, pues proteger la participación política requiere prevenir amenazas, atender denuncias y garantizar condiciones equitativas, sin convertir la seguridad en instrumento de presión o ventaja partidista, mientras los ciudadanos esperan que los mapas anunciados sirvan para reducir riesgos reales y no únicamente para respaldar un discurso de tranquilidad previo a las elecciones.